

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS PARES.

PRECIOS DE SUSCRICION—En Orense, por trimestre, 5 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 7 pesetas.—
—Números sueltos, 38 céntimos.
Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos y Antonio Otero, Colón núm. 16.—En las demás provincias, en las principales librerías.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para esta capital de provincia desde su publicación oficial en esta Gaceta, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857). Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean de parte no pública, se insertarán oficialmente en esta Gaceta, con el fin de dar publicidad a los actos de la Administración, y para que los interesados en ellos puedan comparecer en el acto de la expedición, en el caso de que se les conceda el recurso de reposición.

PRIMERA SECCION

PARTE OFICIAL

PRESENCIA DE LOS SEÑORES

DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey Don Alfonso y la Reina Doña María de las Mercedes continúan sin novedad en su importante salud.

De igual manera continúan la Serna, Sr. Princesa de Asturias, SS. MM. el Rey D. Francisco de Asís y Doña María Cristina de Borbón, Sr. Infanta Doña María de la Paz y Doña María Eulalia, y los Serenos, Señores Infantes Duques de Montpensier y sus Augustos Hijos.

Se suplen los ausentes por los señores

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

Se suplen los ausentes por los señores

Habiéndose cometido por los señores

decretos de indulto, se inserta de nuevo el decreto de indulto.

En 15 de Julio de 1877, el Sr. D. Juan

gracias a la intervención de los señores

creyendo que los señores

penados, se hallen cumpliendo condena o a disposición del Jefe

buenal de la prisión. Los condenados en el 3.º de Agosto

rán haber observado buena conducta y dado pruebas de arrepentimiento, por lo que

beneficio que por dichos artículos se les concede.

(Gaceta núm. 20,111)

Remitido a informe del Consejo de Estado el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Orense contra un

buenal de la Diputación provincial, relativo a la construcción de una alcantarilla en la

via pública, la Sección de Go-

biernación de este alto Cuerpo ha emitido el siguiente dictamen: Excmo. Sr. La Sección ha examinado el adjunto expediente en que el Ayuntamiento de Marchante recurre en alzada contra un acuerdo de la Diputación provincial de Navarra, de 1.º de Julio de 1877, por el que se le concede a Blas Martínez, propietario de una finca, por la cual cubría el agua para otras fincas, entre ellas la de D. Blas Martínez, construyó un edificio y de lo cual resultó perjudicado el caudal de las aguas.

Insistido expediente en el año de 1874, por parte de la instancia de D. Blas Martínez, y los peritos, acordó el Ayuntamiento la construcción de una alcantarilla, para evacuar las aguas de la finca que va a la finca de la finca.

Este acuerdo se adoptó en el día 1.º de Julio de 1874, sin que fuera presentado ningún recurso.

Pero en 22 de Julio de 1876, Doña Felicia Pardo, viuda de Blas Martínez, y sus herederos, se dirigieron al Ayuntamiento exponiendo que con la variación del curso de las aguas que se había efectuado el predio que le pertenecía era

serviente en vez de dominante, y que por lo tanto se le había perjudicado al pueblo obligando al Ayuntamiento, como en el acuerdo se disponía, a la construcción y conservación de la alcantarilla.

Pedia por tanto que se repusieran las cosas a su antiguo estado, y la corporación municipal, atendiendo a que no había recibido que se había perjudicado a los interesados el acuerdo de 1874, y que con arreglo a su art. 130 todas las obras necesarias para la servidumbre de acueducto han de ser de cuenta del que las solicita, y a que compete a las Municipalidades todo lo referente a la policía rural y a la conservación de la vía pública, dispuso en 31 de Agosto de 1876 que la alcantarilla que se construyese, rellenándose de tierra firme para evitar su hundimiento, por lo que el Ayuntamiento, acordó, negando la competencia al Ayuntamiento, que en el día en el asunto, por el art. 130 de la ley provincial todo lo referente a los intereses de las provincias está a

cargo de las Diputaciones, y por tanto a la de Navarra, tocándole cuando se trata de la servidumbre constituida sobre una carretera provincial.

Añadía que el Ayuntamiento debió abrir información sumaria para averiguar la causa del extravío de algunos documentos del expediente de 1874, de lo cual resultaría que D. Blas Martínez, cuya finca se opone a la subsistencia de la alcantarilla, fue quien promovió aquel, y asistió a la colocación de las piedras que forman esta.

Exponía, por último, que se había creado un estado posesorio, que lleva de existencia dos años, y por tanto, no se puede atacar, y concluía suplicando a la Diputación que revocara el acuerdo del Ayuntamiento.

Informó el Alcalde que nada se había resuelto en cuanto a la servidumbre de aguas de interés particular, pero si con respecto a lo que se relaciona con el arreglo y conservación de la vía pública, pues si bien la alcantarilla está construida en una carretera provincial, ocupa un trozo de una de las calles de la población.

Además, añadía, que no ha podido respetar el acuerdo de 1874, en que no consta si hayan guardado las formalidades que exige la buena administración, pues no aparece la instancia que se dice presentada por Blas Martínez, no intervino en la declaración pericial la Comisión de policía urbana, y no consta que el acuerdo se notificara a los interesados.

Concluía exponiendo que no comprende como se dispuso que la construcción y entretenimiento de la alcantarilla fuera de cargo del Ayuntamiento.

Pasado el expediente a informe de la Dirección de obras provinciales, lo evacuó manifestando que la alcantarilla está situada en el casco del pueblo de Marchante, que al hacerse la carretera se dejó el trozo que por el atraviesa a cargo del pueblo, de tal manera, que el que se varió el curso de las aguas en nada afecta a la provincia, y que estas aguas irían perfectamente al Puerto de Felicia Pardo, si la alcantarilla estuviese corriente y limpia.

La Diputación provincial en

23 de Diciembre de 1876, acordó revocar el acuerdo del Ayuntamiento, sin perjuicio del derecho que tenga Doña Felicia Pardo a que la alcantarilla se conserve expedita y corriente.

Contra tal resolución recurre en alzada el Ayuntamiento, citando el art. 117 de la ley de aguas, según el cual para la construcción de la servidumbre de acueducto es precisa la licencia del Gobernador civil, y el 130 y 133 de la misma, según los cuales los gastos que ocasiona esta clase de servidumbre han de ser de cuenta del solicitante. No informa la Diputación provincial, aunque lo previno ese Ministerio, pero lo hace el Gobernador de la provincia de un modo extenso y razonado.

Allega por que se confirme el acuerdo de la Diputación, apoyándose en que no se trata de la creación de la servidumbre de acueducto, para cuyo efecto existen las prescripciones de la ley de aguas que cita el Ayuntamiento: en que el acuerdo no es revocable por la misma Autoridad administrativa, según declara la sentencia del Consejo de Estado de 6 de Noviembre de 1865; y en que la alcantarilla llena el objeto propuesto sin perjudicar a nadie.

Conocidos los antecedentes, observase que, como acertadamente dice en su informe el Gobernador, no se trata de la creación de una servidumbre de acueducto, sino de la reforma de otra preexistente, y por tanto no pueden invocarse en este caso los artículos de la ley de aguas que a la creación de dicha clase de servidumbres se refieren.

Además debe tenerse en cuenta que el acuerdo de 1874 fue consentido y la producción de los sus efectos por mas de dos años, constituyendo un estado posesorio que es digno de respeto.

Esto mismo prueba que el perjuicio que se alega no es tan inmediato como se supone, viniendo a corroborarlo el informe del Director de caminos provinciales, que después de describir las dimensiones de la alcantarilla afirma que, estando en buen estado de conservación a nadie perjudica.

Si, pues, no es posible que la Administración después del

cargo de las Diputaciones, y por tanto a la de Navarra, tocándole cuando se trata de la servidumbre constituida sobre una carretera provincial.

Añadía que el Ayuntamiento debió abrir información sumaria para averiguar la causa del extravío de algunos documentos del expediente de 1874, de lo cual resultaría que D. Blas Martínez, cuya finca se opone a la subsistencia de la alcantarilla, fue quien promovió aquel, y asistió a la colocación de las piedras que forman esta.

Exponía, por último, que se había creado un estado posesorio, que lleva de existencia dos años, y por tanto, no se puede atacar, y concluía suplicando a la Diputación que revocara el acuerdo del Ayuntamiento.

Informó el Alcalde que nada se había resuelto en cuanto a la servidumbre de aguas de interés particular, pero si con respecto a lo que se relaciona con el arreglo y conservación de la vía pública, pues si bien la alcantarilla está construida en una carretera provincial, ocupa un trozo de una de las calles de la población.

Además, añadía, que no ha podido respetar el acuerdo de 1874, en que no consta si hayan guardado las formalidades que exige la buena administración, pues no aparece la instancia que se dice presentada por Blas Martínez, no intervino en la declaración pericial la Comisión de policía urbana, y no consta que el acuerdo se notificara a los interesados.

Concluía exponiendo que no comprende como se dispuso que la construcción y entretenimiento de la alcantarilla fuera de cargo del Ayuntamiento.

Pasado el expediente a informe de la Dirección de obras provinciales, lo evacuó manifestando que la alcantarilla está situada en el casco del pueblo de Marchante, que al hacerse la carretera se dejó el trozo que por el atraviesa a cargo del pueblo, de tal manera, que el que se varió el curso de las aguas en nada afecta a la provincia, y que estas aguas irían perfectamente al Puerto de Felicia Pardo, si la alcantarilla estuviese corriente y limpia.

La Diputación provincial en

23 de Diciembre de 1876, acordó revocar el acuerdo del Ayuntamiento, sin perjuicio del derecho que tenga Doña Felicia Pardo a que la alcantarilla se conserve expedita y corriente.

Contra tal resolución recurre en alzada el Ayuntamiento, citando el art. 117 de la ley de aguas, según el cual para la construcción de la servidumbre de acueducto es precisa la licencia del Gobernador civil, y el 130 y 133 de la misma, según los cuales los gastos que ocasiona esta clase de servidumbre han de ser de cuenta del solicitante. No informa la Diputación provincial, aunque lo previno ese Ministerio, pero lo hace el Gobernador de la provincia de un modo extenso y razonado.

Allega por que se confirme el acuerdo de la Diputación, apoyándose en que no se trata de la creación de la servidumbre de acueducto, para cuyo efecto existen las prescripciones de la ley de aguas que cita el Ayuntamiento: en que el acuerdo no es revocable por la misma Autoridad administrativa, según declara la sentencia del Consejo de Estado de 6 de Noviembre de 1865; y en que la alcantarilla llena el objeto propuesto sin perjudicar a nadie.

Conocidos los antecedentes, observase que, como acertadamente dice en su informe el Gobernador, no se trata de la creación de una servidumbre de acueducto, sino de la reforma de otra preexistente, y por tanto no pueden invocarse en este caso los artículos de la ley de aguas que a la creación de dicha clase de servidumbres se refieren.

Además debe tenerse en cuenta que el acuerdo de 1874 fue consentido y la producción de los sus efectos por mas de dos años, constituyendo un estado posesorio que es digno de respeto.

Esto mismo prueba que el perjuicio que se alega no es tan inmediato como se supone, viniendo a corroborarlo el informe del Director de caminos provinciales, que después de describir las dimensiones de la alcantarilla afirma que, estando en buen estado de conservación a nadie perjudica.

Si, pues, no es posible que la Administración después del

cargo de las Diputaciones, y por tanto a la de Navarra, tocándole cuando se trata de la servidumbre constituida sobre una carretera provincial.

Añadía que el Ayuntamiento debió abrir información sumaria para averiguar la causa del extravío de algunos documentos del expediente de 1874, de lo cual resultaría que D. Blas Martínez, cuya finca se opone a la subsistencia de la alcantarilla, fue quien promovió aquel, y asistió a la colocación de las piedras que forman esta.

Exponía, por último, que se había creado un estado posesorio, que lleva de existencia dos años, y por tanto, no se puede atacar, y concluía suplicando a la Diputación que revocara el acuerdo del Ayuntamiento.

Informó el Alcalde que nada se había resuelto en cuanto a la servidumbre de aguas de interés particular, pero si con respecto a lo que se relaciona con el arreglo y conservación de la vía pública, pues si bien la alcantarilla está construida en una carretera provincial, ocupa un trozo de una de las calles de la población.

Además, añadía, que no ha podido respetar el acuerdo de 1874, en que no consta si hayan guardado las formalidades que exige la buena administración, pues no aparece la instancia que se dice presentada por Blas Martínez, no intervino en la declaración pericial la Comisión de policía urbana, y no consta que el acuerdo se notificara a los interesados.

Concluía exponiendo que no comprende como se dispuso que la construcción y entretenimiento de la alcantarilla fuera de cargo del Ayuntamiento.

Pasado el expediente a informe de la Dirección de obras provinciales, lo evacuó manifestando que la alcantarilla está situada en el casco del pueblo de Marchante, que al hacerse la carretera se dejó el trozo que por el atraviesa a cargo del pueblo, de tal manera, que el que se varió el curso de las aguas en nada afecta a la provincia, y que estas aguas irían perfectamente al Puerto de Felicia Pardo, si la alcantarilla estuviese corriente y limpia.

La Diputación provincial en

23 de Diciembre de 1876, acordó revocar el acuerdo del Ayuntamiento, sin perjuicio del derecho que tenga Doña Felicia Pardo a que la alcantarilla se conserve expedita y corriente.

Contra tal resolución recurre en alzada el Ayuntamiento, citando el art. 117 de la ley de aguas, según el cual para la construcción de la servidumbre de acueducto es precisa la licencia del Gobernador civil, y el 130 y 133 de la misma, según los cuales los gastos que ocasiona esta clase de servidumbre han de ser de cuenta del solicitante. No informa la Diputación provincial, aunque lo previno ese Ministerio, pero lo hace el Gobernador de la provincia de un modo extenso y razonado.

Allega por que se confirme el acuerdo de la Diputación, apoyándose en que no se trata de la creación de la servidumbre de acueducto, para cuyo efecto existen las prescripciones de la ley de aguas que cita el Ayuntamiento: en que el acuerdo no es revocable por la misma Autoridad administrativa, según declara la sentencia del Consejo de Estado de 6 de Noviembre de 1865; y en que la alcantarilla llena el objeto propuesto sin perjudicar a nadie.

Conocidos los antecedentes, observase que, como acertadamente dice en su informe el Gobernador, no se trata de la creación de una servidumbre de acueducto, sino de la reforma de otra preexistente, y por tanto no pueden invocarse en este caso los artículos de la ley de aguas que a la creación de dicha clase de servidumbres se refieren.

tiempo transcurrido venga a de clarar nulo causando perjuicios lo que no los trae en la actuali dad, y teniendo además en cuenta las atribuciones que la ley concede a las Diputaciones provinciales;

La Sección opina que proce da de desestimar el recurso de al zada del Ayuntamiento de Mur chante.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinsento dictámen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo a V. S. con devolución del expediente de referencia, para su conoci miento y demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 13 de Diciembre de 1877. Romero y Robledo, Sr. Gobernador de la provin cia de Navarra.

(Gaceta núm. 21.)

Remitido a Informe del Con sejo de Estado el expediente y recurso de alzada promovido por el Ayuntamiento de La Unión contra una providencia de ese Gobierno de provincia que revocó un acuerdo de aquella Municipalidad, referente a un horno de pan cocer de la pro piedad de D. José Cegarra, la Sección de Gobernación de este alto Cuerpo con fecha 30 de Oc tubre último, ha emitido el si guiente dictámen:

«Excmo. Sr. D. Antonio Co mellas é Iniesta acudió al Ayun tamiento de La Unión manifes tando que D. José Cegarra había construido sin licencia oportu na un horno de cocer pan que descansaba sobre la pared me dianera de la casa del exponen te; y como esto constituía un pe ligro para él y su familia, y quita ba valor a la finca, pedía que se ordenase a Cegarra que suspen diése inmediatamente la explo tación del horno, y que si en el término de un mes no acredita ba haber obtenido la autoriza ción necesaria para construirlo, se procedería a su demolición.

Pasado el asunto a la Comi sion de ornato, que informó que debía suspenderse la explota ción del horno porque se apoyaba en la medianería de la casa de Comellas, y porque ni la bó veda ni la chimenea tenían la altura que marcan las Ordenan zas, el Alcalde, conforme con este parecer, dispuso la suspen sion solicitada interin no se re parasen los defectos menciona dos, según lo establecido por las Reales órdenes de 19 de Ju nio de 1861 y 11 de Enero de 1865 para lo cual había que pedir la licencia correspondiente.

Después de conminado y mul tado D. José Cegarra por no dar cumplimiento a esta providen cia, recurrió contra ella al Ayuntamiento, pidiéndole que permitiese que el horno siguie ra funcionando, puesto que re unía todas las condiciones de seguridad.

Para probar este extremo acompañó un certificado del Ar quitecto titular de Cartagena, en el que se expresa que las Reales órdenes invocadas por el Ayun tamiento no son aplicables al caso, porque sólo se refieren a las fábricas de cal, yeso, pólvora

ra y otras materias explosivas, que el horno dista de la pared divisoria 14 pulgadas, es decir, mas de lo que previenen las Or denanzas de Cartagena y Bar celona; que la chimenea es per pendicular a la boca del horno y sale recta por encima del tejado; que el almacén de la leña para el consumo diario se halla separado del horno por un pa tio; que desde que se constituyó la villa del Garbanzal, hoy de la Unión, no se había puesto impedimento ni exigido condi ciones para la construcción de hornos de cocer pan, y que se gún el estado de los materiales, el de que se trata llevaba dos años, por lo menos, de funcio nar sin interrupción.

El Ayuntamiento acordó con firmar la providencia del Alcal de, y habiendo pedido el intere sado que, previo reconocimiento de la Comisión de ornato y del perito competente, se alzase la suspensión, la Municipalidad dispuso que se estuviera a lo resuelto, y que cuando se solici tase la licencia proveyera en la forma que hubiese lugar.

Apelado este acuerdo para ante la Comisión provincial, ésta, en vista de la contradicción que resultaba entre el informe de la Comisión de ornato y el certificado del Arquitecto de Cartagena, dispuso que el de la provincia pasase a reconocer el horno, y fundándose en que es te opinaba que eran excelentes las condiciones de la fábrica, sin que la explotación ofreciese el menor asomo de peligro, y en que no tenían aplicación las Reales órdenes citadas, informó al Gobernador que procedía re vocar los acuerdos del Ayunta miento, y así lo decretó esta Autoridad.

Comunicada esta resolución a la Municipalidad, resolvió al zarse de ella ante V. E., du rante el tiempo que medió entre el reconocimiento de la Comisión de ornato y los de los Arquitectos provincial y de Car tagena; Cegarra corrigió los de fectos de que adolecía el horno, porque para la construcción y reparacion de cualquier edificio es necesaria la licencia del Ayun tamiento, y para otorgarla res pecto a los hornos de cocer pan debe oírse a los propietarios colindantes, con arreglo al Real decreto de 20 de Junio de 1849, porque el interesado no había pedido permiso para construir ni para reformar el suyo, y por que con la revocacion de sus acuerdos se autorizaba a este para eludir el cumplimiento de una obligación impuesta a todos los vecinos de la villa y se pri vaba al Ayuntamiento de un recurso que legitimamente de bía percibir.

La Sección al emitir Informe según se le previene en la Real orden de 16 de Julio último, con que se le remitió este expedien te, cree que debe abstenerse de examinar el asunto en su fondo, puesto que no puede ser resuel to en vía gubernativa, y de cali ficar, por mas que lo encuentre censurable, el proceder del Al calde al atribuirse una facultad que está reservada al Ayunta miento, porque habiendo este hecho suya la providencia en que se mandaba que el horno

suspendiese sus funciones, pue de considerarse legitimado aquel acto.

Así la ley orgánica de 20 de Agosto de 1870, vigente cuando el Ayuntamiento de La Unión dictó los acuerdos de que se tra ta, como la de 16 de Diciembre último, en virtud de la cual pasó al Gobernador la resolución del recurso interpuesto ante la Co misión provincial, señalan co mo de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos todo lo relativo a policía urbana, rural y de seguridad, y ambas leyes establecen que sólo en el caso de haberse cometido alguna in fracción de la misma o de otras

especiales, podrán los particu lares alzarse contra los acuer dos dictados por los Ayunta mientos en los asuntos que les competen, y como ni D. José Cegarra fundó su apelacion en que se hubiese faltado a algun precepto legal ni se encontro despues trasgresion de esta in dole, ni puede dudarse que ni los acuerdos de la Corporacion municipal dictados en materia que le compete exclusivamente, sin infraccion de ley, fueron ejecutivos, y que no procedia por tanto contra ellos el recurso gubernativo, hay que concluir que no estuvo en su lugar la providencia del Gobernador de Murcia de 14 de Febrero último, y en su consecuencia opina la Sección que se debe dejar sin efecto, sin perjuicio de los de rechos de que D. José Cegarra se crea asistido, para que pueda defenderlos donde y segun vi ere conveniente.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinsento dictámen, se ha servido resol ver como en el mismo se pro pone.

De Real orden lo digo a V. S. acompañando adjunto el expe diente de referencia, para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 27 de Diciembre de 1877. Romero y Robledo, Sr. Gobernador de la provin cia de Murcia.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

Circular.

QUINTAS.

Debiendo verificarse el sorteo general de los mozos compren didos en el reemplazo del cor riente año conforme a lo preve nido en la circular de 28 de No viembre último, publicada en el núm. 75 del Boletín oficial de la provincia el día 3 de Febrero próximo, en cargo a los señores Alcaldes el mas exacto cumpli miento de las disposiciones de la ley para llevar a efecto aquel acto, recomendándoles al propio tiempo remitan en el término que señala el art. 70 de la refe rida ley, las dos copias literales del acta de celebracion de dicho sorteo con el fin de poder ele var a la superioridad este Go bierno el estado general de los mozos que hayan sido sorteados y al cual hace referencia la dis posicion 5.ª de la circular citada. Del celo de los referidos se ñores Alcaldes me prometo la

mayor observancia de las pre venciones que les reconiendo y les advierto que si como no es de esperar llegasen a desaten derlas adoptaré contra los mis mos las disposiciones mas enér gicas.

Orense 27 de Enero de 1878. El Gobernador, JUAN C. BERNAD.

JUNTA PROVINCIAL

DE INSTRUCCION PÚBLICA.

Circular.

El Tribunal de oposiciones para provistar las escuelas de niños de Laza y niñas de Mon terrey, ha tenido a bien señalar al día 31 del actual, a las once de la mañana, para dar principi o a los ejercicios de los aspi rantes que se han presentado, teniendo lugar aquellos en la sala de actas de la Escuela Nor mal de esta provincia sita en la calle de Santo Domingo.

Lo que la Junta hace publico para que llegue a conocien to de los interesados.

Orense Enero 28 de 1878.—Por acuerdo de la Junta.—José L. Gil, Secretario.

TERCERA SECCION.

GOBIERNO MILITAR.

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en telegrama de hoy me dice lo siguiente:

«Ministro Guerra, Gobernadores militares de las provincias.

Los individuos de tropa que se hallen disfrutando de licencia se gun Real orden de 16 de Abril de 76, y estén para terminar el plazo o incorporarse, continuarán en su uso hasta nueva orden.— Disponga V. E. se dé publicidad a esta disposicion.

Lo que se publica en el Boletín oficial de esta provincia para que los Sres. Alcaldes se sirvan hacer lo saber a los individuos de tropa que se encuentran en sus municipios disfrutando licencia, i segun se previene en la anterior dispo sicion. Orense 27 de Enero d. 1878.—El Brigadier Gobernador, Ramon Erenas.

Don Valentin Rodriguez, Te niente graduado, Alférez de la Comandancia de Carabineros de esta provincia de Orense, Fisca en comisions.

Hallandome instruyendo suma ria a los paisanos vecinos de Vi llardebós Manuel Gonzalez Die guez, Antonio Nuñez, André Noguerol Amaro, José Gonzale y Agustín Dieguez, por el delito de atropello, y arrebató de una aprehension, que conducian tres Carabineros a Verin el día 1.º del actual, los emplazo por medio de este tercer edicto para que en el

termino de diez dias se presentan a prestar declaracion, y de no hacerlo se les seguirá el perjuicio consiguiente, siendo juzgados en rebeldia.

Verin 26 de Enero de 1878.

Valentin Rodriguez.

INTENDENCIA MILITAR DE GALICIA.

El Intendente militar del distrito de Galicia.

Hace saber: Que no habiendo producido resultado las dñs. subastas intentadas para contratar a precios fijos el suministro de pan y pienso a las tropas y caballos del Ejército y Guardia civil estantes y transeuntes en la Plaza de Orense, por el termino de nueve meses, contados desde primero del actual, a fin de Setiembre venidero, en virtud de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Director general de Administracion militar en 16 del corriente, se admiten proposiciones sueltas, en la Secretaria de la Intendencia militar y Comisaria de guerra de la referida Plaza, desde esta dia hasta el 31, para verificar dicho servicio con sujecion al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en ambas oficinas.

Coruña 21 de Enero de 1878.

José M. Rojo.

CUARTA SECCION.

COMISION PROVINCIAL

DE LUGO.

2097. UTA

Modificado por la Diputacion provincial, de conformidad con el Ayuntamiento de esta capital, el pliego de condiciones económicas por que se ha de regir el contrato para la construcción de un edificio que con destino a Casa de Maternidad y Hospicio ha de llevarse a cabo en las afueras de esta capital. La Comision permanente, autorizada por la Diputacion, acordó en sesion de 12 del corriente anunciar la subasta de las obras, señalando para que tenga efecto el dia 1.º de Marzo próximo a las doce de la mañana, bajo el tipo de 301.400 pesetas 54 céntimos a que se eleva el presupuesto.

El remate tendrá lugar en el Palacio de la Diputacion ante la Comision provincial y otra que de su seno designe el Ayuntamiento, con asistencia del Contador de fondos provinciales y de Notario público que autorizará el acto.

Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados, arreglados al modelo que a continuacion se inserta, durante la primera media hora que está designada para la subasta, acompañando la carta de pago que acredite haber hecho el

depósito provisional por la cantidad de 15.070 pesetas dos céntimos, ó sea el 5 por 100 del importe del presupuesto, en la Caja municipal de esta provincia, y la cédula de vecindad del proponente, sin cuyos requisitos no serán admitidas, como tampoco las que excedan del tipo del presupuesto referido.

El depósito en valores públicos se constituirá con arreglo a lo prevenido en el Real decreto de 29 de agosto de 1876.

El proyecto, presupuesto y pliego de condiciones facultativas y económicas se hallarán de manifiesto en la oficina del arquitecto provincial para que puedan enterarse los que desean mostrar, se licitadores.

El que resulta rematante constituirá el depósito definitivo, ó sea el 10 por 100 de la cantidad total en que consista el remate, en el termino de diez dias siguientes al en que se le notifique su adjudicacion, y otorgará la correspondiente escritura de fianza, presentando una copia de la Secretaria de la Diputacion, cuyos gastos serán de su cuenta, así como los de insercion del anuncio de subasta en la Gaceta de Madrid, con arreglo a la Real orden de 25 de Setiembre de 1875.

Lugo 14 de Enero de 1878.

El Vicepresidente, Antonio Camba. Por acuerdo de la Comision, Pedro Gonzalez Masada, Secretario.

Modelo de proposiciones

Don N. N. vecino de. oiente, rado del anuncio publicado por la Comision provincial de Lugo para la adjudicacion en pública subasta de la construcción de un edificio con destino a Casa de Maternidad y Hospicio en las afueras de dicha capital, y del proyecto presupuesto y pliego de condiciones facultativas y económicas, se comprometo a tomar a su cargo la ejecucion de la obra por la cantidad de. (en letra) y al efecto acompaña la cédula personal y la correspondiente carta de pago que acredita haber hecho el depósito de 15.070 pesetas dos céntimos, que se requiere para tomar parte en la subasta.

(Fecha y firma del proponente)

Empresario arrendatario del Impuesto de Minas

Como Delegado de esta Empresa pongo en conocimiento de los Sres. Propietarios, Gerentes o Representantes de Minas que se hallan en desahucio por el pago del canon de superficie que si en los dias primeros del próximo mes de Febrero no se presentan en la casa del que suscribe, calle del Instituto núm. 4, a satisfacer sus

atrasos, se procederá contra ellos conforme a lo prevenido en las leyes e instrucciones vigentes, en Asimismo se les hace saber que en el referido mes de Febrero próximo, tienen el deber de pagar en el domicilio del citado Banquero, el importe del tercer trimestre del año económico actual, evitando a esta Delegacion el disgusto de acudir a las medidas de apremio.

Orense 29 de Enero de 1878.

Alejandro Perez.

QUINTA SECCION.

AYUNTAMIENTOS.

Junquera de Ambia.

Hallándose vacante la Secretaria del Ayuntamiento de Junquera de Ambia, en esta provincia, dotada con 1.100 pesetas de sueldo anual, los que aspiran a la misma pueden presentar sus solicitudes documentadas al Sr. Presidente de dicho Ayuntamiento en el preciso termino de quince dias, a contar desde el primero de su insercion en el Boletín oficial.

Junquera de Ambia 21 de Enero de 1878.

El Alcalde, Francisco Dieguez.

SÉTIMA SECCION.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

Don Domingo Salazar, Juez de primera instancia de la ciudad de Orense y su partido.

Hace saber, que en autos sobre ejecucion de transacion celebrada en pleito seguido en este Juzgado a instancia de Doña Amalia Gonzalez, viuda del Coronel D. Baltasar Gomez, y D. Francisco Fernandez Leboeiro, de esta vecindad, como albaceas testamentarios del Gomez, contra D. Juan Rodriguez Alonso, D. Vicente Maria Vazquez Moreira, como marido de Doña Antonia Rodriguez, y D. Hilario Velez, en concepto de curador de Doña Delia y Doña Lestia Carballo Rodriguez, vecinos de esta ciudad, sobre pago de reales, se embargó, retasó y vende en pública subasta la finca siguiente:

1.º Al termino de Portoseixiño correspondiente a las parroquias de Sejalvo y Noalla, de las Alcaaldas de Orense y San Ciprian de Viñas, una finca rústica en que está situada una casa de alto y bajo, todo independiente y murado, de extension superficial con la de la casa, 13 hectáreas, 36 áreas y 57 centiáreas, equivalentes a 212 ferrados y 15 copelos, que hacen 305 cabaduras y 17 copelos en sembradura, en una pieza, ocupando la casa una área, 52 centiáreas, equivalentes a seis

copelos sembrados. El terreno que mide 13 hectáreas, 36 áreas y 20 centiáreas, igual a 212 ferrados y nueve copelos, sembrado, ó sea en 305 cabaduras y 17 copelos, por el cual hay un camino de San Ciprian de Miño a Noalla, esta actualmente destinada a prado con agua en un estanque inmediato a la parte superior en la misma finca y la debarba Barbañá del que puede tirarse por una presa construida que hay en el prado a campo; un viñado y alguna parra; a majuelo inmediato a la casa; un labradío regadío con agua de una mina que hay en el monte; a labradío seco con una higuera, algunos castaños y la era de majar; a patio ó corral exterior de la casa en el que hay un hórreo de madera cubierto de tela y colocado sobre tres baldosas ó mesetas y seis pies de cantería, y a monte regular con esquilmo, algunos robles, penascos y agua. Tiene muros regulares y dobles en su mayor parte, unos de cerramiento y otros de contención, y confina por la cima al Este con monte de Benito Díaz, de Noalla y otros, con camino de Sejalvo a Noalla, por el cual tiene una entrada, con montes de D. Fernando y D. Jose Gutierrez y con pinar y soto de Pedro y Jose Sequeros, que fueron de D. Isidoro Nóvoa Camino, antes de D. Jose Camino; por el lado del Norte con montes de los Pedro y Jose Sequeros, que tambien ha sido del D. Isidoro, con monte de Baltasar Fernandez y con viñado de José Antonio Fernandez, arriba y abajo del camino de San Ciprian a Noalla y de entrada a la finca; por el fondo al Oeste con dicho camino en parte, con monte del José Antonio Fernandez y con el río Barbañá, en cuya orilla el prado tiene varios sauces y no hay muro, y por el lado del Sur donde hay otra entrada, con montes inmediatos al lugar de la Aspera, de Antonio Gonzalez, de Sejalvo, Josefa Blanco y herederos de Francisco Delgado. Fue retasada la finca rústica en sus diferentes clases, con inclusion de muros y del hórreo anexo, en 12.209 pesetas.

Y la casa que se halla circundada por aquella, en 3.250 pesetas.

Que ambas sumas en retasa componen la de 15.459 pesetas. Y deduciendo 880 pesetas, capital de la renta anual de 22 ferrados de centeno que se dice afectan a la finca, para el dominio de D. Peregrina Azpilcueta.

Queda líquido el valor en retasa de toda la pieza de Portoseixiño, ó sea la casa y terreno indicados, en 14.579 pesetas.

Las personas que a dicha finca quieran hacer postura, concurrirán a la sala de audiencia de este Juzgado el dia 28 de Febrero

